

## De la represión estatal a la democracia tradicional: crisis y permanencias del sistema hegemónico uruguayo, 1968-1985

Silvia Dutrenit Bielous\*

Cuando en diciembre de 1985 regresé a Uruguay después de 10 años de ausencia, y más de 11 de dictadura militar, dos hechos me sorprendieron. Uno fue la sensación de libertad política que se vivía unida a la generalizada idea de que esa realidad era un logro colectivo. La situación económica, padecida como drama por la mayoría de la población, no opacaba la distensión provocada por el abandono del gobierno que habían consumado los militares y la recuperación creciente de la participación ciudadana.

El otro hecho sorprendente fue la conmoción que me produjo escuchar, al mejor estilo del cuento costumbrista latinoamericano la simple exclamación: llegaste, de nuevo por acá. Como si los diez años transcurridos, y dramáticamente sufridos, se hubieran desdibujado, aún casi borrado, porque lo que primaba era la tradición y la continuidad de un modo de vida que renacía más allá de los años oscuros de la dictadura.

Lo dicho encierra los signos de un mundo inmóvil pero paradójicamente cambiante. Por un lado, todo estaba igual pero, para la generación que asistió a los conflictos del 68, jamás se había disfrutado de un clima político de libertad y democracia tal en una sociedad estancada. Por el otro, del interior mismo de la tradición se recuperaba un estilo de concebir la democracia que se inculcaba desde antaño, partiendo de la escuela primaria y llegando a otras tantas instancias de formación colectiva<sup>1</sup>, pero que en el último cuarto de siglo no había tenido el consenso social del que gozó durante ese año.

---

\* Historiadora y latinoamericanista uruguaya. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, México, D.F. Autora de artículos y libros de su especialidad, entre otros: *El Salvador, una historia breve*, México, Alianza Editorial Mexicana, 1989. *El Salvador, textos de su historia*, México, Nueva Imagen, 1989. *América Latina entre los mitos y la utopía*, Madrid, Universidad Complutense, 1990 (coautora). *El impacto político de la crisis del 29 en América Latina*, México, Conaculta -Alianza Editorial Mexicana, 1990 (coautora). Actualmente realiza una historia comparada sobre el papel de los principales partidos políticos durante las últimas dictaduras militares en Argentina, Brasil y Uruguay.

<sup>1</sup> Se hace alusión a la práctica de elección de representantes para las distintas funciones que van desde el encargado de la Cruz Roja escolar al responsable de la cooperativa institucional.

Estas evidencias motivaron algunas preguntas sobre los hechos acaecidos y el proceso histórico uruguayo. En este trabajo se intenta contestarlas o, al menos, dar algunas claves para un acercamiento a los distintos fenómenos. La primera enuncia el interés por conocer cuáles fueron las bases de la estabilidad política y del consenso democrático. Una segunda manifiesta la necesidad por definir qué fuerzas fueron las responsables de la desestabilización del sistema hegemónico. Por último, la tercera, denota la preocupación de por qué, a pesar de la desestabilización, y la consecuente ruptura, se recupera el sistema basado en los pilares de antaño.

La búsqueda de respuestas no será exhaustiva. Por el contrario, se procura elucidar las líneas más gruesas que cimentaron los fenómenos observados y el proceso acaecido. De ahí que se omitan múltiples acontecimientos.

Hay que subrayar que se recurrió a algunas categorías para avanzar metodológicamente en el análisis histórico. Sobresale un apoyo gramsciano, que hace innecesaria su explicación. Pero sí es conveniente aclarar que en el uso de la categoría sistema hegemónico se está entendiendo la globalidad, es decir, el todo integrado por el Estado, el sistema político y la sociedad, y configurada alrededor de la ideología. Esta ideología se percibe como la forma de organización referencial del sistema.

### Bases de la estabilidad política y del consenso democrático

El caso uruguayo ha demostrado que es posible desarrollar un sistema hegemónico que integre a la sociedad durante varios decenios. Tal vez lo más singular y lo más difícil de quebrar, para los sectores que tras largos años de esfuerzos lograron debilitar el sistema, ha sido la estructura ideológica y política de esa situación histórica. En Uruguay, la organización de la hegemonía que hizo viable mantener sin fisura al bloque histórico hasta avanzados los años sesenta, tuvo sus orígenes a principio de siglo con las dos presidencias de José Batlle y Ordoñez<sup>2</sup>. A partir de entonces, y con la finalización del último conflicto armado entre los partidos tradicionales<sup>3</sup>, Colorado y Blanco, se fue cristalizando la forma democrática de gobierno. De manera simultánea se ori-

<sup>2</sup> José Batlle y Ordoñez fue presidente en dos períodos, 1903-1907 y 1911-1915. Conocido como el gran reformador del Estado, fue el artífice del modelo de dominación basado sobre amplias posibilidades redistributivas.

<sup>3</sup> Los partidos tradicionales reconocen su origen en la cuarta década del siglo XIX. Entonces, eran organizaciones caudillescas identificados como bandos Colorado y Blanco. Los bandos políticos se distinguían en las guerras civiles por los cintillos de sendos colores que portaban sus correligionarios. El cintillo se usó por primera vez en la batalla de Carpintería, en 1836, momento histórico reconocido oficialmente como el nacimiento de las colectividades políticas tradicionales.

ginó la legislación social que le valió al Estado su denominación de Estado benefactor.

La adecuación de este sistema político democrático al orden económico capitalista, y la permanencia de un equilibrio sostenido, resultó porque el sistema hegemónico se constituyó como tal. Es decir, la clase dominante logró penetrar en todos los estratos de la sociedad con su concepción del mundo, conquistando una unidad de fuerzas sociales y políticas que justificó y sostuvo su dominio, probado en el consenso activo de los gobernados.

Dos elementos básicos, dos instrumentos, fueron claves para conformar, desde el Estado, el sistema hegemónico: el papel de redistribuidor del ingreso nacional y su aparición, y difusión, con el rol de árbitro entre las clases. Si bien la política económica del batllismo no obtuvo ningún cambio esencial en las estructuras del régimen de producción que dominaban en el país, la legislación laboral y el incremento desmesurado del sector público favorecieron una mayor participación en el ingreso nacional de las clases subalternas. El resultado fue que convalidaba reiteradamente cierta lealtad al aparato estatal que protegía esas modificaciones. Es evidente que el Estado pudo explotar estos instrumentos porque existían condiciones apropiadas o se estaba en vía de obtenerlas y desarrollarlas. En este sentido, la apropiación estatal creciente de la renta diferencial ganadera fue el signo distintivo y la posibilidad de la afirmación del Estado en el transcurrir histórico del siglo.

Para la construcción del sistema hegemónico se necesitó de la configuración de la ideología nacional reformista, transformada en ideología dominante y que tuvo su asidero en los gobiernos de José Batlle y Ordoñez. Los pilares de la ideología creados en el Estado batllista se reconocen, sintéticamente, como los siguientes: la convicción de que el ideal de un Estado es el ejercicio de la democracia liberal y representativa, a la vez, es el papel que debe cumplir el Estado como mediador, es la creencia práctica de la posibilidad de cierto acuerdo social que representaría un equilibrio entre las clases y, por último, es la certeza que la escuela laica y pública reúne, sin distinción del origen social, a todas las personas.

Puede afirmarse que la fuerza de penetración y consenso de la ideología nacional reformista permitió mantener a la clase dominante en su papel dirigente, en tanto conquistó la reunión de sus aliados y sometió considerablemente a sus enemigos.

El desarrollo de un sistema político adoptado al cumplimiento de las funciones dirigentes de la clase dominante proporcionó un rendimiento exitoso para el sistema hegemónico. Los partidos tradicionales, idóneos canales del

ascenso político y social, se han articulado mediante una organización interna basada en la subdivisión en lemas y sublemas de identidad ideológica maleable, pudieron así conservar su unidad y su fuerza electoral<sup>4</sup>. Los partidos tradicionales instituyeron la coparticipación gubernamental<sup>5</sup> que implicó la intervención del partido minoritario en la designación de altos funcionarios públicos. Con ello se concretó el monopolio del aparato estatal por ambos partidos. La trama tejida por los partidos tradicionales devino en un sistema bipartidista fuerte que perduró sin debilitarse hasta los años setenta. Recién en 1971, con la creación del Frente Amplio, organización política que reunió a la izquierda uruguaya, principió la pérdida de fuerza del bipartidismo. Sin duda, la permanencia del consenso del sistema hegemónico requirió continuamente del incentivo de los "clubes" o comités partidarios como expendios privilegiados de favores, desde la vulgar tarjeta para adquirir leche más barata hasta para obtener un empleo público. Estos clubes también eran hábiles tejedores de la infinita y abigarrada red de lealtades personales.

De ahí que una noción arraigada de superioridad y singularidad respecto al contexto latinoamericano, asentada en la creencia del real valor de la movilidad social, manifestada en el impulso a la educación y a la igualdad de oportunidades en el ámbito social y laboral, agobiaba la conciencia del uruguayo medio<sup>6</sup> cuando los primeros desajustes sobrevinieron.

## Hechos y fenómenos de desestabilización

Hasta fines de los cincuenta el Estado seguía conservando su carácter redistributivo y manteniendo, en esencia, los rasgos del sistema político batllista. Por esos mismos años comenzaron a manifestar la endeblez de los

<sup>4</sup> Una característica del sistema electoral uruguayo está en el doble voto simultáneo que existe desde 1924 y que posibilita sufragar al mismo tiempo por el sublema o fracción y por el lema o partido. En 1934 se perfecciona con la aprobación de la Ley de Lemas que con modificaciones se mantiene hasta el presente. Gracias a la Ley de Lemas cada partido, a pesar de sus fraccionamientos, puede actuar como una sola colectividad política. "El artículo 79 de la Constitución de 1934 y 1967 establece que 'La acumulación de votos por lema, para cualquier cargo efectivo, sólo puede hacerse en función de lemas permanentes (...) Un lema para ser considerado permanente, debe haber participado en el comicio nacional anterior, obteniendo representación parlamentaria.' Por medio de esta Ley, los partidos tradicionales aseguraban simultáneamente dos cosas: por un lado su predominio electoral, el monopolio de los cargos de gobierno, y por el otro, evitar el surgimiento de coaliciones electorales circunstanciales, fuera de los lemas". Tomado de Ana María BURIANO CASTRO: "El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay", Tesis de Licenciatura, México, D.F., Facultad de Filosofía y Letras, UNAM p.64. Recién en 1971 el Frente Amplio conquistó el derecho a usufructuar los beneficios de esta Ley.

<sup>5</sup> El origen del gobierno de coparticipación también radica históricamente en el siglo XIX.

<sup>6</sup> Se puede afirmar que es la conciencia que todo oriental lleva adentro.

pilares sobre los que se erigió la ideología nacional reformista. La evidencia del estancamiento, de la involución, de la fragilidad de la Suiza de América<sup>7</sup> germi-  
naba lentamente. El ánimo crítico inició su crecimiento en la medida que las manifestaciones de dicha endeblez iban cubriendo la vida nacional.

La grave crisis económica suscitada a mediados de los cincuenta y las tensiones sociales resultantes amenazaron, cada vez con mayor insistencia, el consenso que respaldaba a la estructura político partidaria e institucional. Y fue así, a pesar de la tradición de un Estado que siempre mantenía la iniciativa en cuanto orientaciones capaces de sostener el progreso social y el equilibrio político. Pasadas las coyunturas económicas favorables, y con ellas la capacidad de desarrollo político bajo el esquema de un Estado benefactor, empezaba a cuartearse la idea de la excepcionalidad uruguaya.

El estado de ánimo crítico y los hechos que a partir de él se sucedieron contribuyeron a la génesis de una coyuntura diametralmente opuesta a las anteriores. Esta se caracterizó por el creciente éxito de las fuerzas desestructuradoras del sistema hegemónico.

Las creencias populares incorporaron muy lentamente la idea de la terminación, primero paulatinamente y luego abrupta, de la excepcionalidad uruguaya. La negación del sustento hegemónico despuntó originalmente en las organizaciones y partidos que se ubicaban fuera del eje bipartidista. De esa ajenidad y de una incorporación más o menos sustantiva del socialismo se nutrieron para incrementar lo existente y para confirmar la necesidad de un cambio social.

Es así que al movimiento transformador que amanecía objetivamente contribuyeron los partidos marxistas, con sus reformulaciones teóricas y programáticas y el movimiento sindical. Este último se había fortalecido en los cincuenta por la concentración mayor de la clase obrera en Montevideo y, a su vez, en los grandes establecimientos fabriles. El movimiento sindical adquirió una perspectiva más definida por la influencia creciente de las ideas socialistas y el peso específico que en ellas, en su concreción nacional, se le otorgaba a la clase obrera. Lo anterior cooperó para que desde su propio seno se definiera el camino de la unidad como pilar sustancial para el movimiento de las clases subalternas.

Con la concreción unitaria se dio también la propuesta programática del movimiento sindical que hizo pública la visión sobre lo que el país debía ser para un gran sector que ya contaba con estatura nacional. Ello conmovió al

---

<sup>7</sup> Expresión con la que se conoció al Uruguay de la primera mitad del siglo XX.

gobierno y al sistema hegemónico que había demostrado la incapacidad para formular una política económica comprensiva de soluciones nacionales y de bienestar para las grandes masas. De tal forma que estos cambios en el desarrollo tradicional del país constituyeron un parteaguas de la historia. La alternativa quedó más o menos definida de la siguiente manera. El proyecto dominante acentuaba su disparidad con la ideología nacional reformista de un lado, y el proyecto opuesto, plasmado en el programa popular<sup>8</sup>, se incluía en una corriente de rescate nacional y de desarticulación de la hegemonía nacional, por el otro.

La confrontación de estos proyectos condujo a la ruptura del orden institucional, a un interregno de doce años que culminó cuando asumió como presidente Julio Ma. Sanguinetti, el 1º de marzo de 1985. Sin embargo, este prolongado quiebre de las instituciones democráticas, tan consolidadas en la historia uruguaya del siglo XX, fue producto del debilitamiento de las formas tradicionales de gobernar. Al rastrear las raíces de la crisis nacional emerge un momento político relevante que se focaliza en el gobierno de Jorge Pacheco Areco.

¿Qué pasó entonces durante los años que encierran las fechas de asunción de dos presidentes del partido Colorado, Pacheco Areco, diciembre de 1967 y Sanguinetti, marzo de 1985? La primera etapa corresponde a lo conocido en la jerga política como el Pachecato y al subsiguiente gobierno constitucional de Juan Ma. Bordaberry. La segunda abarca la disolución de las instituciones democráticas mediante un autogolpe que dió Bordaberry, el 27 de junio de 1973, y el posterior gobierno militar.

El 7 de diciembre de 1967 murió el presidente Oscar Gestido. Asumió la primera magistratura el vicepresidente Pacheco Areco quien se convirtió en los siguientes cuatro años en el responsable del gobierno más antidemocrático que el país había conocido hasta la fecha. El período pachequista condensó cuatro tendencias sustantivas de la crisis uruguaya que se resumen como sigue: una concentración exacerbada del capital que culminó en la conformación de una oligarquía<sup>9</sup> donde primaba la fracción financiera, la utilización sin reservas de las recetas del Fondo Monetario Internacional para acelerar el proceso concentrador y adecuar el país a la coyuntura internacional, la ruptura con el modo batllista de gobernar en tanto acaecía el desplazamiento de los políticos profesionales por los oligarcas en la responsabilidad directa del aparato estatal y, la última tendencia, el cambio de eje de la ideología desde un discurso concilia-

<sup>8</sup> La denominación de programa popular corresponde al de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, y pertenece a la jerga de la izquierda política.

<sup>9</sup> Se trata del estrecho grupo de la clase dominante ligado a todas las esferas de la actividad económica nacional y, en especial, como se anota en el texto, al ámbito financiero.

dor, propagandista del Estado mediador hacia una concepción de este como defensor del orden contra la subversión. Dicha concepción adquirió su versión caricaturesca en la frase repetida por el presidente Pacheco Areco que él le ponía el pecho a los vendavales que cuestionaban su autoridad desde la sociedad.

En 1968 cuajaban privilegiadamente estas tendencias. El 13 de junio, tras el decreto de Medidas Prontas de Seguridad<sup>10</sup> se desencadenaron algunas acciones estatales que conviene subrayar: comenzó la práctica de gobernar mediante decretos del Poder Ejecutivo, se congelaron salarios y precios para dar paso a las nuevas imposiciones del Fondo Monetario Internacional, se instauró la censura previa en la prensa y se delinearon las dos acciones represivas centrales del período, la militarización de los trabajadores al servicio del Estado y en los primeros días de agosto, a pretexto de encontrar al presidente de las Usinas y Teléfonos del Estado, secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)<sup>11</sup> se allanaron algunos locales universitarios, entre ellos, la sede de la rectoría.

Entre julio y setiembre de 1968 se desarrollaron las principales batallas en defensa de la autonomía universitaria, lesionadas por el Poder Ejecutivo. Se sucedieron manifestaciones y acciones callejeras que aglutinaron no sólo a los estudiantes y a los sectores vinculados a la máxima institución educativa sino también a estudiantes de Enseñanza Secundaria, de la Universidad del Trabajo y del Instituto Magisterial. Paralelamente numerosos gremios obreros confluyeron en el mismo movimiento solidario, enlazando y superponiendo, a la lucha por las libertades democráticas, los reclamos y movilizaciones contra el proyecto de ley de COPRIN (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos) que establecía los mecanismos de control salarial y modificaba el antiguo sistema de relaciones obrero-patronales, regido desde mediados de la década del 40 por los Consejos de Salarios. La política del COPRIN establecía congelación de salarios y supeditación al Poder Ejecutivo de las resoluciones en la materia. El 14 de agosto constituyó el hito fundamental y trágico del período: murió el estudiante de odontología Liber Arce, herido durante una manifestación pacífica el día 13. La fecha selló cambios trascendentales. El entierro multitudinario<sup>12</sup> fue un plebiscito en el dolor contra la política estatal.

---

<sup>10</sup> Medida constitucional con connotaciones similares al estado de sitio.

<sup>11</sup> Movimiento guerrillero, esencialmente urbano, que tomó impulso por esos años con acciones espectaculares.

<sup>12</sup> Las agencias de noticias internacionales estimaron la concurrencia entre 250.000 y 300.000 personas.

La Universidad, baluarte indiscutido de la conciencia liberal uruguaya, se consustanció con la movilización popular al punto que Carlos Quijano tituló<sup>13</sup> desde el semanario *Marcha* "La Universidad es el país". La sangre del estudiante asesinado denunciaba sin más un abandono, el estilo batllista de gobernar y abría una honda brecha entre el gobierno y los sectores democráticos. Una consideración adicional es pertinente: el país contaba en sus anales de violencia con escasos antecedentes, hechos aislados de víctimas obreras en alguna represión sindical, casi siempre, a manos de agentes patronales y nunca la de estudiantes que simbolizaban, en la imagen dominante, una muerte de probables y prósperos ciudadanos y presente de jóvenes románticos que luchaban por sus ideales.

La sola mención a algunos momentos significativos valen para caracterizar la etapa pachequista y su aguda incidencia en el desequilibrio del bloque histórico.

En junio de 1971, la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay (CNT), central única, llevó a cabo su 2º congreso ordinario donde resumió la etapa vivida. Realizado al mismo tiempo que la campaña para las elecciones nacionales de 1971, el Congreso anudó la polémica interna alrededor de la táctica con la necesaria proyección de la visión obrera sobre lo sucedido. La síntesis dice con claridad el papel que se asignaba la clase obrera y enfrenta cualquier posición economicista: "Esta realidad social y política del Uruguay de hoy no es fruto de la casualidad, ni ha surgido espontáneamente. No es sólo el resultado exclusivo de la agudización de la crisis, que alcanza niveles insostenibles y que golpea y conmueve la superestructura social y política del país, ni es el resultado de la 'obra' de Pacheco (...) lo que ha hecho posible la presente realidad política es que paralelamente a una situación objetiva de crisis, de deterioro de la economía, se ha forjado un movimiento sindical y popular unido, con claras definiciones programáticas, que ha luchado, y ha luchado bien"<sup>14</sup>.

Estas experiencias fueron golpeando paulatinamente los partidos tradicionales y coaligando algunos de sus sectores, en la lucha cotidiana, con la izquierda. El resultado fue la extensa coalición política que se denominó Frente Amplio que integró desde los partidos de tradición marxista, hasta grupos desprendidos de los partidos Blanco y Colorado y el partido Demócrata Cristiano, pasando por algunas agrupaciones de diverso origen ideológico, incluso religioso. Se comprobará luego la influencia dominante del programa de la CNT en

<sup>13</sup> Prestigioso intelectual y político uruguayo que a través del semanario *Marcha*, el cual dirigía, generó una corriente de opinión nacional.

<sup>14</sup> Tomado de Wladimir TURIANSKI: *El movimiento obrero uruguayo*, Suecia, Ediciones por Uruguay, s.a. p.64.

el elaborado por el Frente Amplio, por ello su aparición obligó a un deslinde respecto a la política y a la política electoral por parte de la CNT que se plasmó en ese 2º Congreso: "(...) el movimiento sindical no vive ni se mueve en función de una elección. Su tarea es la de procesar la unidad del pueblo en torno a su programa de soluciones (...)"<sup>15</sup>.

El período que va desde julio de 1971 hasta setiembre de 1971 estuvo recorrido por cuatro tendencias principales cuyas manifestaciones pautan los acontecimientos.

La primera muestra el nacimiento y la consolidación del Frente Amplio, fundado el 5 de febrero de 1971. Esta colectividad política proclamó al general retirado Liber Seregni como su candidato presidencial, el 26 de marzo del mismo año. La proclamación se llevó a cabo en un acto que constituyó una demostración palpable de las fuerzas acumuladas en torno a una propuesta de cambio radical. El Frente Amplio protagonizó una campaña que, hostigada permanentemente por el gobierno y las organizaciones parapoliciales, desembocó en otro gran acto el 24 de noviembre de 1971, y obtuvo en los comicios nacionales 304 mil sufragios. Una breve observación es pertinente. Hay que precederla de algunos hechos. La elección de 1971 registró el mayor número de votantes de la historia del país: el 96.7% de los inscriptos. Si se compara con la elección de 1966, la de 1971 marcó un aumento muy sensible de los votos por un programa de transformaciones estructurales, en la anterior los grupos que existían fuera de los partidos tradicionales, y que luego formaron el Frente Amplio, alcanzaron 118 mil votos<sup>16</sup>.

Los partidos ligados a la clase obrera y otras fuerzas aliadas no concitaron todo el potencial contrahegemónico generado en los años anteriores. Por el contrario, la traducción de la lucha social en ruptura del bipartidismo, en expresión transformadora de carácter radical siguió siendo su principal tarea para plasmar la contrahegemonía en la alternativa de poder.

Una segunda tendencia de este período se gestó con el ascenso del presidente Juan Ma. Bordaberry, 1º de marzo de 1972. El triunfo electoral del nuevo mandatario mostró una vez más la exitosa aplicación de la Ley de Lemas<sup>17</sup> que hizo posible la designación como presidente de un hombre con débil respaldo político. Esta circunstancia, unida a las simpatías que profesaba el

<sup>15</sup> Tomado de Wladimir TURIANSKI: op.cit., p.65.

<sup>16</sup> Respecto a los comicios de 1966 se debe agregar que del número de votos emitidos, 1 millón 656 mil, 800 mil se pronunciaron contra la política gubernamental, en unas elecciones, como las uruguayas, donde la participación de jubilados y funcionarios públicos se estimaba en un 50% de los votantes.

<sup>17</sup> El significado de esta Ley fue esbozado en la nota N° 5.

presidente por el régimen militar brasilero le dieron al gobierno recién constituido su singularidad. Esta se sintetizó en un estilo autoritario amparado por un compromiso limitado con las instituciones democráticas y con las fuerzas políticas, incluso con las de su propio partido. Realizador de una política económica que continuaba a la ejercida durante el gobierno colorado de Pacheco Areco, el nuevo presidente la respaldó con una represión más aguda y llegó hasta el golpe de Estado para imponer su proyecto regresivo. La persistencia reaccionaria que manifestó fue la contracara de la lucha obrera y popular, y de la ampliación de sus efectos sobre el conjunto de la sociedad. De ahí el peligroso y desembozado comportamiento antipopular y antidemocrático que caracterizó la política estatal del período. Ya nada quedaba de las maneras mediadoras del Uruguay batllista, lo que reinaba era la desestabilización del sistema.

La tercera tendencia la constituyó, en su trama fundamental, el reinicio de la acción directa del Movimiento de Liberación Nacional, suspendida por la tregua declarada en 1971 para los comicios nacionales. En el clima de violencia que siguió a las elecciones se destacaron nuevos decretos presidenciales contra la prensa. Dichos decretos impedían la divulgación de noticias sobre movilizaciones, huelgas, paros, ocupaciones, campamentos y ollas sindicales. Sobresalió también el secuestro perpetrado por el Escuadrón de la Muerte<sup>18</sup> del estudiante y militante frenteamplista Ibero Gutiérrez. Allí se ubica la ruptura de la tregua que fue a su vez la proclamación de un cambio táctico en la acción directa, como lo manifestaron sus documentos. "(...) definiríamos la línea inmediata así: debemos pasar a través de un plan concreto al hostigamiento directo y sistemático de las fuerzas represivas como modo principal de acción"<sup>19</sup>.

Resultado de esta definición táctica sucedió uno de los hechos centrales y definitorios de la política del MLN, la ejecución de algunos miembros del Escuadrón de la Muerte el 14 de abril de 1972. La respuesta del Estado no se hizo esperar, ese mismo día fueron asesinados varios integrantes del movimiento tupamaro. Asimismo se constituyó el Estado Mayor Conjunto, como organismo coordinador de la lucha antisubversiva integrado por las tres armas militares y la policía y, paralelamente, se suspendieron las garantías individuales, declarándose el estado de guerra interno. La avalancha represiva fue incontenible y la amplia infraestructura del movimiento fue destruida. De esta forma fueron encarcelados, o muertos, sus principales cuadros y se aplicó una sistemática práctica de tortura para obtener información. Las acciones del MLN se respaldaron en dos percepciones principales. Una, fue la que condensaba el deterioro y la corrupción del sistema político, el vaciamiento de las formas de-

<sup>18</sup> Grupo parapolicial, llamado también Comando Caza Tupamaros de tendencia ultraderechista.

<sup>19</sup> Omar COSTA: *Los Tupamaros*, México, Era, 1972, p.293 (Colección Ancho Mundo, 34).

mocráticas y, a su vez, la consecuente dificultad para traducir las fuerzas acumuladas en el plano social en una contrahegemonía que aunara a su capacidad de cuestionamiento, verificada por el respaldo de masas recibido en los conflictos de clase medulares, con la posibilidad de concretarse en poder. Otra, fue la visión de la dialéctica compleja y multiforme de hegemonía y contrahegemonía como una reducida lucha entre aparatos antagónicos, de los cuales el del Estado ocupaba y subordinaba amplios y decisivos espacios de la sociedad civil, que constriñó y esterilizó aquellos que podrían, extendiéndose, generar situaciones de enfrentamiento decisivo, tal era el caso del movimiento obrero.

La cuarta y última tendencia tuvo que ver con la progresiva injerencia militar en el aparato y las decisiones del Estado que se plasmó definitivamente en este período. Había comenzado de manera palpable con las militarizaciones de 1968-1969 y fue derivando hacia la posesión de responsabilidades en el aparato durante 1970 y 1971. Se destacó en este proceso el decreto de setiembre de 1971 que le otorgaba a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubversiva. El papel asumido por las tres armas se relacionó íntimamente con la cruenta represión de abril de 1972 y fue extendiéndose en otras áreas de la vida política. En este sentido, se inmiscuyeron en la represión a los delitos financieros o en el respaldo a las acciones punitivas como los decomisos de contrabando o de lana acaparada por los estancieros. De manera primero paulatina y después del 14 de abril acelerada, pero siempre sustentando las posiciones conquistadas, las Fuerzas Armadas iban controlando y envolviendo a la sociedad.

Tal cual se percibía por algunos sectores, el golpe de Estado constituía un hecho inevitable. La causa inmediata pudo ser cualquiera, lo que sucedió fue un enfrentamiento de poderes, el 26 de abril de 1973 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el pedido de desafuero del senador frenteamplista Enrique Erro, de acuerdo con el expediente de la Justicia militar que lo vinculaba al MNL. El debate parlamentario se desarrolló durante los dos siguientes meses, siguió un curso agitado, signado por las negativas del Presidente y de la justicia militar a cualquier interrogatorio directo del acusado del Senado.

Aparecía con absoluta claridad la intención de colocar a los políticos y al Parlamento en su último dilema: la aceptación de la prisión de uno de sus miembros por confusas e infundadas acusaciones o el fin del poder legislativo. El Parlamento rechazó la solicitud de desafuero. El Ejecutivo replicó: "No acceder a la solicitud formulada implica por lo tanto sostener que la Justicia Militar y el propio Poder Ejecutivo han actuado, en el caso, con desviación de poder.

Es decir, que han utilizado sus poderes jurídicos con una finalidad distinta a aquella para la cual le fueron conferidos"<sup>20</sup>.

### **El golpe de estado y el fin del sistema hegemónico**

Y congruentemente a las 5:30 horas del 27 de junio el Presidente disolvió el Parlamento, libró orden de prisión contra el senador Erro y sustentó definitivamente su poder en las Fuerzas Armadas. Se prohibió todo tipo de información o comentario sobre las medidas antiinstitucionales decretadas y suspendieron las actividades de la enseñanza hasta el 20 de julio del mismo año.

Los turnos matutinos de las fábricas realizaron asambleas y comenzaron la ocupación de los lugares de trabajo y el cese de actividades. Era la consigna de la CNT en caso de golpe de Estado desde 1966, era la huelga general que se cumplía.

"A las pocas horas del golpe de estado más de quinientas fábricas se encontraban ocupadas por los trabajadores. La CNT llevaba a la práctica la resolución de huelga general que para una eventualidad política con esas características, había sido aprobada en el Congreso de Unificación Sindical siete años antes (1º de octubre de 1966) y reafirmada en las múltiples circunstancias en que las libertades democráticas habían sido amenazadas directamente. De tal modo se paralizaron planificadamente y de inmediato a las empresas industriales, los servicios públicos, privados y estatales, los entes comerciales e industriales del estado, la banca, los transportes, la casi totalidad de la prensa, las actividades portuarias, los espectáculos públicos, la enseñanza. Los estudiantes, docentes y funcionarios universitarios ocuparon el edificio central de la Universidad de la República y el conjunto de sus dependencias, con el apoyo de sus autoridades. Se mantuvo por decisión de las organizaciones sindicales el abastecimiento de servicios fundamentales bajo control de los trabajadores: agua, luz, combustible para sanatorios y hospitales, transportes esenciales, atención médica para casos de urgencia (...) Particularmente condensada en Montevideo, la huelga general abarcó también a los centros poblacionales del interior del país y a la red de sindicatos de asalariados rurales"<sup>21</sup>.

Sin embargo, pese al enorme movimiento combativo y a la casi paralización del país, la huelga no permitió el triunfo del gran torrente social y político

---

<sup>20</sup> *Ultima Hora*, Montevideo, 27 de junio de 1973, p.9.

<sup>21</sup> Lucía SALA DE TOURON; Jorge LANDINELLI: *Cincuenta años del movimiento obrero uruguayo*, México, 1979, Mimeo, p.88.

antigolpista. En aquellos difíciles días la CNT llegó a la resolución de levantar la huelga y de pasar a otras medidas de lucha en la perspectiva de que un repliegue táctico favorecería un enfrentamiento futuro. En el documento difundido por la Central se decía: "La huelga general que hemos realizado constituye una etapa gloriosa de esa larga lucha. Ella no ha permitido alcanzar aún la victoria deseada, pese al heroísmo de los trabajadores, que han tenido que enfrentar condiciones adversas, cuando no han madurado todavía plenamente las bases para lograr esa victoria. La batalla debe pues proseguir, pero se hace necesario cambiar la forma de lucha.

"El principio táctico fundamental en una lucha prolongada es desgastar y debilitar continuamente las fuerzas del enemigo y fortalecer las propias (...) Es este principio el que debe guiar nuestras acciones en este momento dramático"<sup>22</sup>.

La ruptura institucional y la consecuente conformación del gobierno autoritario integran la segunda etapa que interesa en este trabajo. Al igual que la anterior encierra tendencias históricas propias. Sin duda, la etapa sintetiza el momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas, concebida tanto como contrarrevolución preventiva cuanto por el reajuste radical en el modo de gobernar para favorecer a la oligarquía. En todo caso, el *leit motiv* era mantener el dominio en una sociedad que estaba agobiada por una crisis totalizadora.

Estas dos apreciaciones sobre el triunfo del golpe indican por un lado, la existencia de un poder contrahegemónico, al menos eficaz, como para desequilibrar el bloque histórico y por otro, el triunfo de la oligarquía en la medida que finalmente el aparato militar respondió como un sólo hombre a su favor. Lo anterior se refiere a las diferencias surgidas dentro de las tres armas, algunas antes del golpe de Estado, y que despertaron expectativas en las filas políticas de oposición. Aquellas diferencias, al menos, no incidieron lo suficiente para provocar la división y sus consecuentes desprendimientos. Con estas características básicas, movimiento contrahegemónico relevante y oligarquía con aparato militar unificado comenzó la dictadura.

El Estado que en 1972 había recurrido a su institución de reserva, las Fuerzas Armadas, a partir de junio de 1973 se encontró sujeto al poder militar. Las Fuerzas Armadas permanecieron con ese poder hasta 1985. Los once años y varios meses de administración castrense mantuvieron una constante, la falta de consenso popular y cuasi político. La huelga general sirvió para consagrar la unidad del movimiento obrero y popular, y la convergencia, a favor de

---

<sup>22</sup> CNT, *La resistencia obrera uruguaya*. (Para una cronología de la epopeya contra la dictadura, 27 de junio al 11 de julio de 1973), s.e., 1973.

las instituciones democráticas, de destacados sectores del bipartidismo<sup>23</sup> y de distintos grupos de la izquierda política.

De ahí que sin base social y política cierta el gobierno cívico militar con Juan Ma. Bordaberry como presidente, y luego sin él, dismanteló los restos del sistema político que habían logrado sobrevivir al Pachecato. La etapa dictatorial condensó cuatro tendencias sustantivas que dan lugar a cierta periodización y que, en algún caso, coinciden con el tiempo.

Una primera es de abandono de los principios liberales y del papel del Estado como árbitro, con una sistemática represión, de ocupación de todos los espacios estatales por las fuerzas autoritarias suprimiendo el sistema político tradicional, y de un intento de reestructuración de la organización sindical, eje del movimiento contrahegemónico, y del sistema de partidos. Estos procesos ocupan los primeros años del gobierno dictatorial, se extienden, podría afirmarse, hasta 1977, y concordantemente se advierte la respuesta del movimiento sindical y de un movimiento social y político que conoce poco de fronteras partidarias. La segunda tendencia se refiere a la recuperación, y aplicación, del modelo económico con rasgos neoliberales impulsados por Pacheco Areco, cimiento de un futuro cambio radical. La siguiente, y tercera, corresponde al proyecto de reforma constitucional con el que se pretendía establecer la base legal a un tipo de régimen que se venía gestando. Esta reforma fue parte relevante de un cronograma cuyo objetivo era destruir los cimientos del tradicional sistema democrático uruguayo. El proceso de reforma constitucional y de un nuevo Estatuto de Partidos ocupó los años 1979 y 1980. La cuarta, y última, tendencia encierra el fracaso de toda propuesta de modificar la estructura política, exhibe la crisis del modelo económico y concentra la búsqueda de una salida de la dictadura. Destacan en este período, 1980-1985, el auge creciente de las actividades partidarias, sociales y sindicales.

Como cualquier régimen autoritario que interrumpe un prolongado proceso democrático, el uruguayo desestructura, a la vez que transforma, el poder político, antes público ahora privado, eliminando el supuesto de necesidad de una base social de sustento del orden establecido. Es así que la primera tendencia condensa la desaparición del consenso habitual acerca de los detentadores del poder. Se aplicó en adelante un estilo de imposición, de coersión para una "reconstrucción nacional". En esencia, se procuró desarticular la cultura cívica y política del país. Un punto importante al respecto fue la erradicación de numerosos ámbitos de la actividad corriente de los uruguayos ligados a la educación y la cultura, al sindicato y a la política. Las consecuencias de esta

<sup>23</sup> Estos mismos sectores habían contribuido en 1972, mediante el voto aprobatorio de sus representantes en el Parlamento, a la declaración del estado de guerra interno y a la correspondiente participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversivas.

situación creada devinieron, en lo cotidiano, en un arrinconamiento obligado del individuo hacia el ámbito familiar y en la reducción, hasta su mínima expresión, de las relaciones sociales.

Durante el régimen militar se practicaron distintas formas de represión, las más visibles iban desde la violación de los derechos humanos con desaparición y muerte de muchas personas, cárcel y torturas para otras miles, a la ilegalización de todo tipo de organización sindical y política<sup>24</sup>. El exilio fue para tantas otras personas un camino que evitaba la represión directa.

En un folleto editado por el movimiento de solidaridad internacional se publicó el informe de un residente en el Uruguay de aquellos días. Del mismo se extrajo lo siguiente. "La situación actual del Uruguay se asemeja, en muchos aspectos a la de un 'país' ocupado por tropas enemigas. En forma insensible pero continuada las Fuerzas Armadas uruguayas han ido procesando un cambio de mentalidad que las llevó desde la posición de fuerzas defensoras del sistema y del Poder Civil, primero a la intervención colaboradora en la solución de sus problemas políticos, luego a tomar partido en sus disidencias apoyando a unos grupos de poder contra otros, luego a la dirección de la acción de la oligarquía contra el pueblo y más tarde, a enfrentarse con organismos representativos de esa oligarquía, como la Federación Rural, llegando a actuar como si consideraran a la población civil, en todos sus niveles sociales, económicos y burocráticos, como enemiga"<sup>25</sup>.

Al destruir las estructuras tradicionales, las autoridades de facto sustituyeron el sistema político y el Parlamento por un Consejo de Estado cuya función era avalar los distintos decretos gubernamentales. En una primera medida, noviembre de 1973, se ilegalizó a los partidos marxistas y a algunas organizaciones de la izquierda política. Luego se suspendió el funcionamiento de los partidos tradicionales, lo que no significó su ilegalización. De ahí que los partidos Blanco y Colorado designaran sus respectivos Triunviratos como organismos transitorios de dirección política, pese a que se mantuvieron en el inmovilismo hasta 1977. Mientras las organizaciones políticas ilegalizadas expresaron su oposición de distintas maneras en acciones de fuerza muy variable.

En 1976, Juan Ma. Bordaberry propuso un proyecto de reestructuración corporativa del Estado que implicaba la desaparición de los partidos tradicionales por considerarlos caducos. La propuesta no recibió el consenso dentro del

---

<sup>24</sup> Las formas de represión recayeron no sólo en el grueso del movimiento opositor sino que se extendieron a los simpatizantes y a los familiares de las personas requeridas por los comandos militares.

<sup>25</sup> *Uruguay: vida cotidiana*, s.p.i., p.3.

equipo gobernante y produjo la sustitución obligada de Bordaberry. En su lugar quedó, por poco tiempo, el Dr. Demichelli.

También en 1976 se empezó a cumplir el objetivo de modificar el aparato estatal mediante distintos Actos Institucionales. Ejemplo de ello fue la creación del Ministerio de Justicia y la proscripción de la actividad política para un considerable número de ciudadanos. La negativa del Dr. Demichelli, de avalar con su firma las proscripciones políticas, provocó su alejamiento y un nuevo nombramiento que recayó en el Dr. Aparicio Méndez.

En tanto se introducían estos cambios, se pretendió configurar una organización del movimiento sindical que terminara con su tradición automática. El primer decreto 622/73 consagró normas relativas al funcionamiento de los sindicatos. Los trabajadores resolvieron fortalecer los sindicatos históricos y adaptarlos, en lo formal, a las nuevas "reglas de juego". Masivamente se llevó a cabo la "reafiliación sindical" y, frente a la decisión de fortalecer las viejas estructuras organizativas, el gobierno, que aspiraba a un funcionamiento restringido y a representaciones proclives a los intereses patronales y gubernamentales, emprendió el camino de finiquitar el conjunto de la actividad sindical<sup>26</sup>.

De manera clandestina se continuó hostigando a la política gubernamental y se bregó sin tregua por el respeto a los derechos humanos. Esta postura provocó la represión permanente sobre la izquierda más tradicional y la prisión constante de los militantes que se iban renovando.

Con el régimen dictatorial, el elenco de gobernantes también fue modificado. Se procedió a un recambio por tecnócratas cooptados desde el aparato militar y que pasaron a incidir en los destinos nacionales. Apoyado en un orden autoritario, el gobierno insistió en la aplicación de un modelo económico. Sin embargo, la incapacidad para ofrecer una solución estable, en la medida que no existió un proyecto factible de imponerse y ser aceptado por la mayoría, determinó una serie de coyunturas críticas en la cúpula castrense.

---

<sup>26</sup> Un segundo intento por reglamentar y consolidar organizaciones sindicales oficiales apareció en 1979. Pero, los anteproyectos de leyes reguladoras se empantanaron en los ministerios, al mismo tiempo que los organismos internacionales censuraban los procedimientos del gobierno uruguayo. Finalmente el tercer intento se convirtió, irónicamente, en el gran movimiento sindical que reivindicaría la tradición autonómica. En 1981 se sancionó la Ley 15137 y su reglamentación. Esta consagró la aparente decisión del gobierno de reactivar la actividad sindical. Desde su discusión los trabajadores censuraron el proyecto de ley. La Ley denominada de Asociaciones Profesionales implicaba de hecho una ley antisindical por su contenido, y por su mismo nombre al desconocer el de sindicato. Sin embargo, fue usufructuada por los trabajadores al ser revertida, motivando la reactivación sindical con una línea opositora de acción. La PIT, hizo posible el logro de algunos espacios de expresión y reafirmó las viejas prácticas del movimiento.

El impulso del modelo neoliberal, ya intentado por Pacheco Areco con intermitentes éxitos, y que constituyó la segunda tendencia de la etapa, buscó reactivar el proceso de acumulación de capital mediante una redistribución regresiva. Esta tendencia se superpone cronológicamente a los períodos anteriores y posterior, su inicio data del bienio 74-75 y concluye en el bienio 81-82. Durante el Pachecato, cuando la crisis de hegemonía tendía a convertirse en crisis de dominación, poco importaron los pilares de aquel Estado benefactor y redistribuidor en función de una pirámide social extensamente ensanchada en el medio. Con los militares, al igual que con Pacheco Areco, lo que se quiso fue favorecer a un grupo de la clase dominante vinculado estrechamente al capital extranjero. La consecuencia lógica fue la reconversión del Estado benefactor en relación a la supresión de las conquistas sociales.

Un análisis somero de los indicadores básicos expresan, de manera gráfica, la involución notoria en materia de niveles de vida y la inevitable búsqueda de "nuevos horizontes", aunque estas manifestaciones eran ya evidentes en la década del 60<sup>27</sup>.

Más arriba se anotaba que desde 1968 se intentó aplicar el modelo neoliberal. En 1973 esta tendencia se aminoró para impulsarse con fuerza a partir del bienio 1974-1975 y finalmente hizo crisis en los años 1981-1982. Los tecnócratas de entonces apoyaban su iniciativa en un diagnóstico sobre la economía del país que se puede sintetizar en los siguientes rasgos.

1) Un importante déficit público debido a que los precios de los bienes y servicios que ofrecía el Estado eran bajos y las cargas sociales absorbían una parte excesiva del presupuesto. 2) Los costos de producción eran muy altos en relación a las ganancias que podrían obtenerse, porque los salarios y los intereses eran elevados. 3) Un déficit apreciable en la balanza comercial se había generado por la inamovible estructura de productos exportables que no se adaptaba al mercado mundial ofreciendo nuevas mercancías y por la sobrevaluación del peso para favorecer a las industria dedicada al mercado interno.

De acuerdo a este diagnóstico, apenas esbozado, las medidas fueron: imponer precios públicos realistas, reducir el presupuesto social y el sector público, bajar el salario, alentar la inversión extranjera bajando costos financieros, eliminar protecciones mediante devaluaciones y abolición de aranceles, y promover las exportaciones de productos no tradicionales.

---

<sup>27</sup> Como dato elocuente, la explotación de la mano de obra se reflejó en un descenso del salario real de un 50% respecto a 1971.

Y aunque se aplicaron estas medidas los resultados difirieron de lo esperado y se enumeran a continuación. 1) La reactivación del proceso de acumulación se realizó pero no provino de los inversores extranjeros ni de la iniciativa de los empresarios nacionales sino que respondió, por un lado, a los estímulos fiscales y apoyos dados por el gobierno y, por el otro, al resurgimiento de la inversión dirigida por un sector público imposible de ser reducido en el período. 2) Cuando se inició la desestimulación fiscal y se redujeron los niveles de producción las nuevas inversiones públicas y privadas causaron una mayor proporción de endeudamiento externo respecto al ingreso nacional. 3) Las mejores condiciones jurídicas para la inversión extranjera no se respaldaron en una nueva situación política duradera de manera que los inversores esperados no llegaron a la cita. 4) Los costos financieros, dependientes de la deuda pública que estaba estrechamente ligada al mantenimiento del aparato del Estado, no se redujeron.

En consecuencia, a un mayor nivel volvieron a presentarse déficit público, costos altos en relación a los ingresos para el sector privado, aún más desequilibrados por los costos de la deuda externa, y déficit en la balanza comercial. Pero simultáneamente se deterioró el ingreso medio y la participación en el ingreso de los trabajadores.

La sociedad uruguaya en el mismo período mostraba una permanencia, su tasa de crecimiento histórica seguía siendo bajísima, el proceso migratorio, iniciado en la década del 60, continuaba expulsando del país a los sectores con mayores posibilidades de modificar la secular estructura etaria y, por último, la consecuente osificación social, el tradicional "peso de los viejos" en todas las instancias de la vida nacional<sup>28</sup>.

Desde antes del derrumbe del modelo en 1981, los militares buscaron institucionalizar la dictadura para lograr el consenso siempre necesario cuando se quiere seguir gobernando. Luego, una vez que las medidas en pro de la institucionalización fueron derrotadas, dado el repudio mayoritario de la población a la continuidad del régimen y el inocultable fracaso económico, planearon instancias que les permitían ir trazando el camino para la entrega del gobierno a los civiles. Este proceso debe ser descrito y analizado en dos partes que, según el orden establecido en este análisis, se relacionan con las últimas tendencias, la tercera y la cuarta.

---

<sup>28</sup> Esto hace referencia a que es característico del Uruguay la necesidad, salvo excepciones, de pasar por un largo calvario, en gran medida relacionado con los años, para alcanzar alguna responsabilidad reconocida. Lo anterior es posible porque tanto la tasa de mortalidad como la natalidad indican una población sana y activa durante muchísimos años y un escaso crecimiento. El resultado fue una renovación de la estructura ocupacional lenta, manifestación de una sociedad conservadora.

La institucionalidad del régimen, razón última de su supervivencia, ya estaba sobre la mesa de discusiones en 1976 cuando el conflicto cívico militar terminó con la presidencia de Bordaberry. No obstante, fue recién en 1979, año en que el modelo económico vivía su auge, cuando se elaboró el cronograma cuyo objetivo era la institucionalización del régimen militar.

Dicho proyecto constituye la tercera tendencia que recorre el período 1979-1980 y consistía en plebiscitar una reforma constitucional que haría posible la permanencia militar en el poder con respaldo legal. La convocatoria obligó a los militares a abrir espacios de expresión para los partidos que habían sido suspendidos en su funcionamiento. Ello devino en un crecimiento lento pero sostenido de la actividad política. Se agregaron en la reactivación los partidos y movimientos ilegalizados.

El 25 de noviembre de 1980 se llevó a cabo el plebiscito nacional. Los militares no lograron el consenso esperado, en cambio recibieron la negativa del 60% de los ciudadanos<sup>29</sup>. Las cifras hicieron explícito el deseo mayoritario de la ciudadanía de restituir la Constitución violada con el golpe de Estado.

El triunfo del NO (expresión distintiva de la papeleta que se oponía a la reforma) provocó un cambio sustancial en la situación política y fue el hito político del período militar. Resultó la derrota del proyecto castrense bajo las reglas de juego establecidas por el régimen. Por un lado, afirmó y dio confianza al movimiento opositor y por el otro, la evidente derrota obligó a redefinir la estrategia militar en un nuevo cronograma. Fue así que en éste se debió considerar el reconocimiento explícito de los partidos políticos, se trató exclusivamente de los tradicionales Colorado y Blanco y de la Unión Radical Cristiana, luego transformado en Unión Cívica<sup>30</sup>.

Las elecciones internas de estos partidos, efectuadas el 28 de noviembre de 1982, representaron otro hecho sustantivo. El objetivo era la designación de las autoridades partidarias, quienes en adelante dialogarían con los militares. De ahí que las elecciones internas simbolizaron el retorno legal al bipartidismo y permitieron reafirmar el repudio al poder militar. Asimismo se puede

---

<sup>29</sup> En el plebiscito más del 85% de los ciudadanos autorizados. En la contienda se pronunciaron por el No a la reforma 885.824 sufragantes (el 57.9%) y por el SI 643.858 sufragantes (el 42%). Información tomada de Gerardo CAETANO y José RILLA: "La era militar". En: *El Uruguay de la dictadura 1973-1985*, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1989. (Fascículo 2), p.49.

<sup>30</sup> La Unión Radical Cristiana, luego Unión Cívica, es un partido político con insignificante capacidad de convocatoria pero importante tradicionalmente en los acuerdos nacionales. En 1979, cuando los militares dieron los pasos previos para el cumplimiento de su proyecto e iniciaron el diálogo con algunas figuras políticas de los partidos tradicionales, invitaron también a dirigentes de este nimio partido político que, para la ocasión, ofrecía una imagen de cierta pluralidad.

afirmar que repolitizaron a la sociedad<sup>31</sup>. Más del 80% de los sufragios respaldaron, dentro de cada lema, a los grupos opositores al régimen. El resultado no consideró el voto organizado de la izquierda, cuya expresión estuvo prohibida. Es necesario subrayar que pese a la orientación del principal dirigente del Frente Amplio desde la cárcel, Liber Seregni, de votar en blanco, para afirmar la identidad e individualidad de la izquierda frenteamplista, muchos de sus partidarios sufragaron dentro de los partidos tradicionales. Esta actitud respondió a la convicción de que era pertinente respaldar a los sectores más democráticos, blancos y colorados, expresiones hasta ese momento de la oposición radical a los militares.

Con varias interrupciones se desarrolló el diálogo entre las autoridades políticas y los mandos de las Fuerzas Armadas. No interesa historiar, en esta oportunidad, los pormenores del proceso de "diálogo político" sino retomar las principales líneas de la apertura. En las mismas se muestra el interés por reconstruir el sistema político en el marco de delimitar garantías y espacios ciertos para las Fuerzas Armadas. Un paso en este sentido fueron las conversaciones del Parque Hotel, conocidas así en la historia política, e iniciadas el 13 de mayo de 1983 y caracterizadas por la exclusión de la izquierda política. Su fracaso fue muy rápido, el 5 de julio del mismo año.

En esa coyuntura, la izquierda se destacó por su capacidad organizativa y de movilización, a pesar de los años transcurridos en que sufrió una represión sostenida. De manera paralela fue recuperando su nivel tradicional y ganando un lugar en las negociaciones hasta integrar la mesa de conversaciones cívico militar, aunque no como organización sino a través de personalidades representativas. También conquistaron un espacio distintas organizaciones sociales, gremiales y sindicales que habían incidido positivamente en la práctica política y social<sup>32</sup>. Quedó afirmado desde entonces que no se puede gobernar ignorando al conjunto activo de la sociedad.

De 1980 a 1984 se destacó el paulatino crecimiento de la actividad sindical y política con carácter público, en tanto permanecieron los métodos represivos hasta los albores del mes electoral de noviembre de 1984. La oposición adquirió carácter público y masivo en 1983. Fue entonces que singulares

---

<sup>31</sup> Apoyados en Gerardo CAETANO y José RILLA, op.cit., p.55.

<sup>32</sup> Las organizaciones y los movimientos de carácter gremial y sindical creados en esos años, una vez configurado el proceso de apertura, se autorreconocieron como continuadores de las estructuras organizativas históricas. Así la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, ASCEEP, y el Plenario Intersindical, PIT, pasaron a denominarse ASCEEP-FEUU y PIT-CNT. Lo novedoso de la etapa fueron los movimientos sociales como los cooperativistas que devinieron en forma idónea de organización durante la dictadura, perdurando con posterioridad. Se hace referencia, en especial, a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCVAM.

formas de expresión, como las jornadas del ruido y las caceroleadas<sup>33</sup> ocuparon parte importante de la actividad social y política. Además, fue 1983 el año en que se autorizó, por primera vez durante el régimen de facto, la conmemoración del 1º de mayo. En este acto se reunieron cerca de 200.000 personas. El corolario del 83 tuvo lugar el 27 de noviembre cuando, con una amplísima convocatoria social y política, se realizó un mitin en el Obelisco capitalino<sup>34</sup>. Allí se congregaron alrededor de 500.000 personas<sup>35</sup> que exigían una apertura política inmediata y amplia. Era el auge antidictatorial, resultado de la confianza popular generada a partir de los comicios de 1980 y 1982.

En tanto los partidos retomaron la iniciativa política, el frente opositor se rompió por la negativa del partido Nacional de participar en cualquier diálogo mientras se mantuviera la proscripción a su principal dirigente, Wilson Ferreira Aldunate. A esta razón se agregó, después del 16 de junio de 1984, día en que regresó Ferreira del exilio y fue detenido, la exigencia de su libertad. Un mes antes, en mayo, las Fuerzas Armadas se habían apresurado a presentar a los partidos un documento que comprendía las bases para el diálogo. La Multipartidaria, agrupamiento de los partidos con ausencia del Blanco o Nacional, hizo llegar a los militares su decisión de negociar. Fue así que el 16 de julio de ese año 84 comenzaron las conversaciones del Club Naval en las que participaron representantes del partido Colorado, de la Unión Cívica, del Frente Amplio y de las Fuerzas Armadas. En esta instancia de negociación se llegó al conocido Acuerdo del Club Naval que determinó la salida del régimen militar, y que se plasmó en el decreto N° 19, último emitido por los militares<sup>36</sup>.

De esta forma, y con escasa credibilidad acerca de la realización efectiva del acto electoral, se efectuaron los comicios del 25 de noviembre de 1984, previa conformación de la Concertación Nacional Programática, CONAPRO<sup>37</sup>.

La máxima instancia electoral se desarrolló en medio de un clima de proscripciones políticas, ejemplo destacado son las de Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, y también de organizaciones, movimientos y partidos políticos.

<sup>33</sup> Se trata de actividades de protesta consistente en provocar a una misma hora intensos e ininterrumpidos ruidos. Fueron llamadas caceroleadas, por ser las baterías de cocina los principales instrumentos de percusión, y resultaron jornadas del ruido en las que fueron aprovechados todos los artefactos que sirvieran al respecto.

<sup>34</sup> Monumento en homenaje a los constituyentes de 1830 y que se encuentra en la principal avenida.

<sup>35</sup> Montevideo cuenta, aproximadamente, con 1.300.000 habitantes.

<sup>36</sup> En el decreto también se consignaban normas transitorias que serían plebiscitadas en 1985 y se ratificaba la convocatoria a elecciones nacionales para noviembre de 1984.

<sup>37</sup> Organismo de convergencia política y social para diseñar la estrategia del primer gobierno democrático.

## La reconstrucción del sistema hegemónico con nuevos elementos

De una rápida observación del resultado electoral se desprende un comentario. El electorado se volcó mayoritariamente por uno de los polos del dilema autoritarismo Vs. democracia y otorgó el triunfo a la democracia. Por dentro de aquél había, y hay, diferencias y la alternativa era por un lado, la afirmación de la tradición nacional y por el otro, la que connotaba cambios radicales. Una vez más triunfó la primera.

La abrumadora presencia de movilización y organización de la izquierda frenteamplista no redundó de igual manera en los resultados electorales. Lo afirmado no desconoce, y menos aún resta valor, al avance porcentual obtenido con respecto a las elecciones de 1971 y al fenómeno de que el Frente Amplio se convirtiera en la segunda fuerza electoral de Montevideo. Seguía estando presente el divorcio entre el comportamiento sindical y social y el comportamiento político. Además, cuando se hace referencia al peso de la tradición, en el sentido de rechazo a los cambios que encierra todo lo conservador que un uruguayo pueda llegar a ser, y su triunfo, ello, también se expresó en la votación dentro del Frente Amplio. Las fuerzas mayoritarias de la coalición, los marxistas, vieron disminuidos porcentualmente sus votos e incrementados los del sector que representaba el ala menos radical, el dirigido por Hugo Batalla<sup>38</sup>. El apoyo recibido por Batalla reflejó el deseo de un cambio siempre que éste fuera moderado. Un elemento más a considerar fue la desventaja electoral de los sectores más golpeados por la represión militar. En el mismo sentido, el recuerdo de la campaña de terror que durante tanto tiempo recibió la sociedad no debe descuidarse en el momento del análisis.

El triunfo lo alcanzó el partido Colorado, el sector denominado Batllismo Unido que sostuvo una oposición al régimen y la predisposición al diálogo, a la búsqueda de acuerdos con los militares. Este sublema representaba en el momento de las elecciones cierta garantía de "cambio de paz". Julio Ma. Sanguinetti, figura destacada dentro de la oposición política, fue el candidato a la presidencia por Batllismo Unido y conquistó la presidencia de la República.

En marzo de 1985, en medio de la expectativa y el apoyo nacional e internacional plasmados en las diferentes delegaciones que concurrieron al anhelado momento, asumió el primer presidente constitucional después de once años. De inmediato se dictó una medida necesaria y esperada: la libera-

<sup>38</sup> Dirigente, de origen colorado, que en 1989 se separó del Frente Amplio y constituyó, con otras fuerzas, la coalición Nuevo Espacio.

ción de los presos políticos, en la que se incluyó a los rehenes<sup>39</sup>, y la desproscripción de movimientos y partidos políticos.

El partido Colorado, como cualquier otro partido que hubiera accedido al gobierno, se enfrentó a los problemas estructurales que abrieron brecha al gobierno militar, con el agravante que representó su profundización, consecuencia directa del mandato autoritario. También como cualquier otro gobierno, el colorado, fue el depositario de las esperanzas, angustias y demandas tantas veces, y tantos años, relegadas de los numerosos sectores pauperizados que clamaban por una reformulación en los lineamientos redistributivos del ingreso nacional. La contraparte de estos sectores, industriales y grandes propietarios ganaderos, el otro polo social, también defraudado por el fracaso neoliberal, volcó su confianza y exigió soluciones inmediatas. Una sociedad convulsionada, con aquella certeza del logro colectivo referido al inicio del trabajo, se sintió con el derecho de ver resueltos sus problemas que pasaban por, una vez retomado el camino constitucional, la resolución de los temas económicos y financieros de cada uno.

Por lo menos eran cinco los fenómenos medulares que signaron al gobierno de Sanguinetti durante su primer año. Sin pretender hacer un ordenamiento que implique privilegiar uno u otro se enumeran a continuación.

Primero. Se trataba de un gobierno que necesariamente debía atender y guiarse por una política de acuerdos y/o concertación con otras fuerzas y partidos, si se quería mantener un cierto nivel de consenso nacional y determinada estabilidad. La necesidad de esta práctica tenía que ver con el extenso movimiento generado antes del gobierno civil y con los compromisos creados también en relación a una población que entonces se ocupaba de todos los temas del país. Pero tuvo vinculación, simultáneamente, con la obligación cívica de tratar de compactar filas alrededor de acuerdos para darle mayor fuerza a las medidas y evitar conflictos desestabilizadores de la democracia. Los militares vigilaban celosamente la situación.

Segundo. Esos militares eran actores "no retirados" de la escena. Las Fuerzas Armadas entregaron el gobierno previo diálogo político y acuerdo final sin actas. En todo caso, su retirada fue ordenada y fríamente calculada, lo que hace suponer una gran capacidad como cuerpo para haber mantenido el orden interno pese al fracaso de la política desplegada, quizás se trató de un repliegue, o de un retiro cauteloso, asegurando las garantías necesarias. Tres hechos reafirman lo dicho. En cuanto a actuar como cuerpo, el tema de los posi-

---

<sup>39</sup> Presos pertenecientes al MLN que estaban en calidad de rehenes. Es decir, en casos de actividades de su organización responderían con su vida. Durante todo el período de su reclusión recayeron sobre ellos las más crueles formas de tortura.

bles juicios por violaciones a los derechos humanos impactó en las Fuerzas Armadas y éstas respondieron sin fisuras (hay en ello algo de instinto de sobrevivencia pero sólo esto no lo explica). La ley de amnistía para los militares que pretendió hacer aprobar el Presidente, y que con otras características al final sancionó, solamente se entiende si los militares mantenían un peso importante en relación a la posible estabilidad del régimen (según la perspectiva del gobierno y de las fuerzas políticas mayoritarias). por último, el Plan Hércules, comentado por distintos medios de comunicación, representaba un acuerdo militar peligroso que podía reproducir aquel año 1972 en que se llamó a las Fuerzas Armadas a luchar contra la subversión.

Tercero. El tema de la democracia tenía, por lo menos en el caso uruguayo, relación directa con la memoria histórica. La democracia que se recordaba del viejo Batlle y Ordoñez vinculada a su práctica efectiva en todas las instancias de la vida social y política, fue la que en esa coyuntura se tomó como valor general. Fue por eso que se rechazó el gobierno militar, la violencia y las leyes represivas, los despojos y, también, todo lo que podía provocar inestabilidad.

Cuarto. Una carga difícil de quitar fue la penosa situación económica. Algunas páginas atrás se hizo referencia al tema, lo cierto fue que abrumados por una deuda externa enorme en relación a las exportaciones y sin perspectivas de cambios reales, poca solución tenía el país si no se insidia en una cooperación regional.

Quinto. En relación a lo regional, un elemento nuevo, inherente al proceso democrático fue la búsqueda de intercambios y cooperación con otros Estados latinoamericanos. La postura de integrarse más a un subcontinente, del que siempre se mantuvo al margen, es un hecho al menos digno de subrayarse. Esto se percibía claramente en los ámbitos gubernamentales y políticos, no así en el conjunto de la sociedad.

A grandes rasgos las perspectivas de cambio en aquella situación tenía que ver con una mayor ligazón al mercado de Brasil y Argentina, y al internacional, que permitieran aprovechar las ventajas comparativas de la agroindustria competitiva (determinada por los recursos naturales y la mano de obra calificada). Lo anterior podría redundar en un crecimiento de la economía que, bien administrado, posibilitaría rectificar la situación de pauperización de los sectores activos de la sociedad. Los cambios económicos imprescindibles no se dieron entonces, y si se pensaron fue para el largo plazo. Sin embargo, y pese que no se vislumbran mayores soluciones, el retorno a una situación autoritaria era difícil. La sociedad uruguaya es de procesos lentos, de forma que

se podía afirmar en aquel momento que había gobierno constitucional por largo tiempo.

El nuevo sistema hegemónico rescató con fuerza los pilares de la ideología nacional reformista. La utopía batllista volvió a acunar a una sociedad que, en contraste con la de antaño, empezó a presentar un comportamiento electoral innovador al volcar su apoyo numéricamente importante a la tercera fuerza política, el Frente Amplio<sup>40</sup>. Es tema de otro análisis el indagar si este cambio en la conducta electoral podría estar relacionado no sólo con la larga trayectoria de combate en defensa de mejores condiciones sociales sino con nuevos discursos y proyectos de la izquierda política, menos radicales y más ratificadores de aquella utopía.

---

<sup>40</sup> En las elecciones de 1989, año que trasciende el periodo de este artículo, el FA ganó en la capital y conquistó el gobierno montevideano.